

Natalidad en Chile: ¿qué hacer?

Pablo Eguiguren F.

Libertad y Desarrollo



En 1960 el promedio de hijos por chilena era 5,5. En 2023, esa cifra cayó a 1,2. Esta drástica caída ha encendido alarmas, pero este fenómeno global —salvo Israel ningún país OCDE supera la tasa de reemplazo de la población— se explica por varios factores, incluidos fenómenos positivos como el auge de la educación y participación laboral femenina, y la fuerte caída del embarazo adolescente, que se dividió por 5 entre dichos años. Por lo tanto, la respuesta de las políticas públicas ante el cambio demográfico debe ser racional y consciente de las limitadas herramientas del Estado para influir en las decisiones familiares.

Eso no significa quedarse de brazos cruzados, sino que exige aprender de otros países y confiar en que, tal como hace más de 200 años, cuando Malthus predijo los problemas del crecimiento de la población, la creatividad humana superará estos desafíos. De hecho, parte de la solución ya la estamos viviendo mediante la

robotización y la inteligencia artificial.

Respecto a la evidencia internacional, no hay datos concluyentes que un mayor gasto público en bonos o subsidios a las familias se traduzca en más nacimientos. Por el contrario, muchos de esos esfuerzos han tenido resultados negativos: en España la introducción del postnatal para padres está asociado con una menor tasa de nacimientos (Farré y González, 2019). Asimismo, al analizar el gasto en apoyo a familias y natalidad de los países OCDE en las últimas dos décadas, no se aprecia una correlación entre ambas variables.

Esto no debería sorprender. La decisión de tener hijos es multifactorial y no cambiará por un bono. Por ejemplo, según la última encuesta Bicentenario UC, un 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años y 19% de los entre 25 y 34 años no desea tener hijos. Tres de cada cuatro chilenos prefieren tener pocos hijos y darles una buena educación. ¿Qué puede hacer el Estado ante esas le-

gítimas preferencias? Muy poco. ¿Debería pronunciarse o intervenir sobre ellas? Definitivamente no.

En cambio, el Estado sí tiene un rol en remover los obstáculos que impiden a las familias tener el número de hijos que prefieran. Ello exige repensar políticas públicas. Desde el acceso a tratamientos

de fertilidad hasta la vivienda y la disponibilidad de salas cuna, pasando por la inserción laboral de las mujeres. Respecto a esto último, en los países más desarrollados, mayor empleabilidad femenina se asocia con mayores tasas de natalidad, porque mayores ingresos per-

miten sostener más hijos. Pero eso requiere, a la vez, medidas robustas de conciliación entre trabajo y familia.

El cambio demográfico obliga a adaptarse, pero evitando medidas de dudosa efectividad o que impliquen una intromisión del Estado en una de las decisiones más íntimas de las personas.

“No hay datos concluyentes que un mayor gasto público en bonos o subsidios a las familias se traduzca en más nacimientos”.